

Between both texts there are important differences analyzed in this article, specially considering the basis of liability, passing from the foreseen objective regime in the preliminary project to another based on blame with inversión of the charges of the proof.

## **LA DIRECTIVA 89/397/CEE, RELATIVA AL CONTROL OFICIAL DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS:**

### **EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS**

por Giuseppe Verardi (1)

#### **INTRODUCCIÓN**

1. La fecha del 1 de enero de 1993 marcará un hito histórico. Ese día las fronteras interiores de la Comunidad Europea habrán desaparecido. Las personas, servicios, capitales y mercancías tendrán derecho a circular libremente entre sus doce Estados miembros. Los productos no estarán ya sometidos a trabas fiscales, administrativas y burocráticas. Los productores se beneficiarán de las ventajas ofrecidas por un mercado de más de trescientos millones de personas. La coordinación o el reconocimiento mutuo de los procedimientos de fabricación, de la composición de los productos y de las normas anularán las incompatibilidades técnicas que se oponen a los intercambios. Finalmente, la armonización de las leyes y reglamentos nacionales reforzará las garantías ofrecidas al consumidor europeo.

2. Ahora bien, en el ámbito de la alimentación, la protección del consumidor presenta dos facetas: por un lado, la defensa contra las infracciones de índole sanitaria que pueden derivarse del consumo de alimentos de mala calidad higiénica o nutricional; por otro, la prevención de los perjuicios de orden económico que pueden resultar de la presencia en el mercado de productos alimenticios cuya calidad comercial no sea irreprochable.

(1) Traducción y referencias bibliográficas. J. Fuster (Bruselas).

3. Hasta un pasado bastante reciente, estos dos aspectos de la protección constituían una competencia exclusiva de las Administraciones nacionales. Cada una de ellas tenía su forma específica de llevar a la práctica esta misión, aunque el enfoque tradicional, en la mayoría de Estados miembros, consistía fundamentalmente en la vigilancia:

- en el interior, de la producción, el comercio y la venta de productos alimenticios, y
- en las fronteras nacionales, de su importación.

La falta de armonización era una fuente de serios inconvenientes. Por un lado, no se aseguraba una protección uniforme del consumidor en todo el ámbito de la Comunidad, especialmente debido a que algunas legislaciones nacionales no preveían el control de los productos alimenticios que no se destinaran al consumo nacional; por otro, los productos contestados en el Estado miembro destinatario podían quedar bloqueados hasta que se resolviera la situación, o incluso ser devueltos al expedidor con todas las desagradables consecuencias que ello comporta.

#### **CONTROLES INTRACOMUNITARIOS**

4. Con la «caída» de las barreras intracomunitarias cualquier control nacional susceptible de crear obstáculos a la libre circulación está condenado a desaparecer. En especial, los controles efectuados en los productos alimenticios por los Estados miembros importadores serán sustituidos por controles efectuados en el Estado miembro productor a cargo de sus autoridades públicas, basándose en criterios uniformes en toda la Comunidad.

Todo ello es, en definitiva, una consecuencia lógica de la sentencia Cassis de Dijon, dictada en 1979, en cuyo fallo se preveía que toda mercancía que cumpla las disposiciones legales del Estado miembro productor tiene derecho —a condición de que ciertas exigencias imperativas de ámbito general no se opongan a ello— a circular libremente en la Comunidad. Dicha sentencia había llevado enseguida al primer plano de la acción a los servicios de control del Estado miembro productor, a los que correspondía en primera instancia la verificación

de la conformidad de las mercancías a la legislación vigente. Ahora, además, se impone una matización: en el contexto del gran mercado único, las autoridades nacionales de control no deberán limitarse sólo a dicha verificación, sino que deberán procurar garantizar al consumidor la más amplia y completa protección.

Es necesario también señalar que, en su caso, los Estados miembros conservarán el derecho de efectuar controles en los productos alimenticios importados de proveniencia intracomunitaria, aunque estos controles deberán efectuarse del mismo modo que los que se lleven a cabo en los productos nacionales destinados al consumo interior, y no deberán suponer obstáculo alguno al libre cambio.

Los principios del control en el mercado único deberán evidentemente fundamentarse en una base común, en cuyo establecimiento tampoco debe olvidarse la dimensión supranacional asegurada por el control efectuado en la fase de la venta al consumidor final, cuando la protección de un solo ciudadano de un Estado miembro se convierte en la protección de la Comunidad por entero.

5. Todas estas consideraciones fueron debidamente tenidas en cuenta por la Comisión cuando se elaboró el documento que se convirtió finalmente en la Directiva 89/397/CEE, adoptada por el Consejo de la CE el 14 de junio de 1989, y por la que se armonizaban los principios básicos que deben guiar a las autoridades competentes de cada Estado miembro en su gestión del control sobre los productos alimenticios.

Esta Directiva constituye un marco general destinado a completarse, mediante disposiciones específicas, a medida que se vaya haciendo sentir su necesidad. Además, deberá complementarse con otras disposiciones, integradas por normas, especificaciones, etc., en los casos en los que la experiencia lo vaya haciendo preciso.

Dicho todo esto, procederemos a resumir sus finalidades y contenido.

En primer lugar, destacaremos que el control tiene por objeto los productos alimenticios, los aditivos y los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con éstos. Su finalidad es prevenir los riesgos para la salud pública, garantizar la lealtad de las transacciones comerciales y proteger los intereses de los consumidores, incluyendo su derecho a una información adecuada. Los aspectos metrológicos, sin embargo, se excluyeron intencionalmente debido a que la metrología es objeto de una legislación comunitaria distinta.

El control deberá efectuarse tanto por lo que se refiere a los productos destinados al consumo en el Estado miembro de origen, como en los productos destinados al mercado único. Además, un Estado miembro no puede excluir del control un producto por el mero hecho de que se destine a un país tercero (lo que, de todos modos, no significa que los productos destinados a terceros países deban ser controlados de la misma manera que los productos destinados al mercado intracomunitario).

El control se basa en inspecciones que pueden tener lugar en cualquier eslabón de la cadena que va desde la producción a la venta al consumidor final. Estas inspecciones pueden efectuarse de manera sistemática, o bien cuando se sospeche que existen irregularidades, respetando siempre, por supuesto, el principio de la proporcionalidad.

Además de las inspecciones, el control puede comportar:

- a) la toma de muestras y análisis efectuados por laboratorios oficialmente reconocidos;
- b) la verificación del cumplimiento de las normas de higiene por parte del personal de la empresa, y
- c) el examen del material escrito y documental de todo tipo.

Los inspectores (que, lógicamente, están obligados por el secreto profesional) están autorizados, a los efectos del control en cuestión, a tomar todas las medidas apropiadas cuando lo estimen necesario; las empresas controladas podrán recurrir contra estas medidas si las consideran excesivas, pero, a la vez, deberán facilitar la tarea de los inspectores.

Estarán sometidos a inspección: el estado y el uso que se haga de terrenos, locales, oficinas, instalaciones, medios de transporte, equipos, materiales, etc.; las materias primas, ingredientes, auxiliares tecnológicos, etc.; los productos semi-acabados; los productos acabados; los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los productos alimenticios; los plaguicidas; los productos y procedimientos de limpieza y mantenimiento; los procedimientos de fabricación y tratamiento de los productos alimenticios; los medios de conservación y el etiquetado, y la presentación de los productos alimenticios.

De todos modos, estos principios son ya ampliamente aplicados en la mayoría de Estados miembros. Por esta razón la transposición a los ordenamientos nacionales de la Directiva no parece plantear mayores problemas.

En la práctica totalidad de los Doce esta transposición se encuentra en una fase avanzada; algunos Estados han llegado a afirmar que ni siquiera tendrán necesidad de adoptar medidas formales de transposición, puesto que todos esos principios se integran ya en su legislación nacional.

Además de establecer dichos principios, la Directiva prevé una serie de acciones entre las que se incluye, a partir de 1991, un programa coordinado de controles para cada ejercicio, sobre la base de una recomendación de la Comisión. Ya se han iniciado los trabajos preliminares al respecto.

## MÉTODOS DE ANÁLISIS

6. Evidentemente, una acción de este tipo y de tan vastas dimensiones presupone la aplicación de métodos de toma de muestras y análisis adecuados. Lo que se pide a dichos métodos es: la especificidad, la exactitud, la precisión, la repetitividad, la reproducibilidad, la sensibilidad (2) y, finalmente, su carácter práctico.

Se plantea, pues, una cuestión: ¿será preciso adoptar métodos oficiales únicos a nivel comunitario? Dicho de otra forma, ¿será necesario armonizar los métodos de toma de muestras y de análisis mediante un acto comunitario?

En principio parece conveniente adelantar una respuesta afirmativa. Así, por ejemplo, puede recordarse que existe un Reglamento por el cual se establecen los correspondientes métodos de análisis para el vino. Además, la Directiva 85/591/ CEE, de 20 de diciembre de 1985, relativa, precisamente, a los sistemas de toma de muestras y métodos de análisis comunitarios para los productos alimenticios destinados a la alimentación humana, ofrece esta posibilidad.

De todos modos, la similitud con el sector del vino es más aparente que real. El Reglamento sobre los métodos de análisis para el vino fue adoptado en el marco del desarrollo de una «política agrícola común». La organización común del mercado vitivinícola supone, entre otras cosas, disposiciones específicas relativas a los vinos de calidad producidos en regiones determinadas y, como consecuencia, la adopción de métodos de análisis que permitan verificar su composición, y, a la vez, comprobar si han sido objeto de tratamientos contrarios a las prácticas enológicas autorizadas.

Dichos métodos son obligatorios para todas las transacciones comerciales; teniendo en cuenta las necesidades del comercio y las posibilidades a menudo limitadas de los empresarios, se ha preferido admitir sólo un cierto número de procedimientos que permitan una determinación rápida y suficientemente segura de los datos precisos. Por ello se han elegido los métodos elaborados por la OIV (3) que son objeto de un reconocimiento generalizado.

El problema del control en el sentido de nuestra Directiva, por el contrario, se encuentra más bien en la perspectiva de la eliminación de obstáculos a la libre circulación de los productos alimenticios. En este ámbito se ha venido realizando la armonización de los métodos de toma de muestras y de análisis mediante Directiva hasta una fecha muy reciente (6 de octubre de 1987: Directiva por la que se establecen los métodos comunitarios de toma de muestras a los efectos del análisis químico para el control de las leches conservadas). La experiencia, sin embargo, ha puesto en evidencia los defectos de este sistema. En primer lugar, es demasiado costoso y muy laborioso; en segundo lugar, es excesivamente lento, de modo que se corre el riesgo de que un método de análisis haya sido ya superado en el momento de la adopción de la correspondiente Directiva; finalmente, su falta de flexibilidad «congela» en cierto sentido los métodos aprobados de esta forma, sin permitir que se realicen oportunas adaptaciones rápidas al progreso técnico, tan frecuentes y necesarias en la química analítica de hoy.

Existe, por tanto, un consenso general sobre la idea de reservar a casos totalmente excepcionales la posibilidad de armonizar que la legislación comunitaria (4) sigue ofreciendo y para buscar la solución al problema en una dirección diferente.

Convendría, pues, consagrar un nuevo principio, según el cual todos los métodos analíticos, oficiales y no oficiales, empleados en los Estados miembros por los laboratorios públicos o privados, se considerarían como equivalentes cuando conduzcan a resultados comparables y de la misma calidad, siempre que dicha equivalencia se establezca a nivel comunitario. Los métodos reconocidos como equivalentes deberían figurar en un «manual» ad hoc, para dar fe, a nivel comunitario, tanto por lo que se refiere a la protección de la salud y a la represión de los fraudes, como para resolver los casos controvertidos o litigiosos de cualquier tipo.

(2) Evidentemente, con un poco de sentido común: no es lógico exigir una sensibilidad a nivel «ppb» cuando las exigencias legales solo se refieren a «ppm»...

(3) Office International du Vin.

(4) Véase la Directiva 85/591/CEE, ya citada.

## EQUIVALENCIAS COMUNITARIAS

### 7. ¿Quién se ocuparía de establecer la «equivalencia»?

La hipótesis de atribuir esta tarea a un servicio de la Comisión se ha abandonado enseguida ya que entrañaría grandes complicaciones administrativas y costes inadmisibles. La vía que hemos escogido debería conducirnos más bien a la creación de una Asociación (de Derecho privado) de analistas alimentarios, que coopere con la Comisión y fuera subvencionada por ésta, fundamentalmente a base de contratos. En esta Asociación estarían representados todos los medios interesados (analistas de la Administración, así como exponentes de la investigación pública y privada, de la agricultura, de la industria, de la distribución y de los consumidores).

En este contexto la Comisión se reservaría la tarea de:

- identificar los sectores problemáticos;
- coordinar el trabajo experimental (se está estudiando en la actualidad la posibilidad de confiar esta coordinación al Instituto del Medio Ambiente del Centro Común de Investigación de Ispra, Italia), y
- suministrar los materiales de referencia adecuados que podrían ser elaborados por Ispra (5) y/o por el Bureau Communautaire de Référence, que actúa en el seno de la Dirección General XII («Ciencia, investigación y desarrollo») de la Comisión.

Por su parte, la Asociación se ocuparía de:

- elaborar un inventario de todos los métodos existentes en cada uno de los sectores identificados por la Comisión;
- proceder a su evaluación teórica y, si fuera preciso, experimental, basándose en ensayos «circulares»;
- en su caso, elaborar nuevos métodos en los supuestos en que se precisen.

Los métodos destinados a figurar en el ya citado «manual» deberán ser, finalmente, homologados por el Comité Europeo de Normalización (CEN).

Se han iniciado ya los contactos entre la Comisión, el CEN y la Federación Europea de Asociaciones de Analistas, en constitución a partir del II Simposio sobre el Control de los productos alimenticios (Roma, diciembre de 1989), en la que la «asociación» a la que nos hemos ido refiriendo podría «cristalizar». Las perspectivas son prometedoras.

(5) El autor se refiere, sin duda, al Instituto del Medio Ambiente del Centro Común de Investigación, ya citado.  
(N. del T.)

8. Es evidente, sin embargo, que el más perfecto de los métodos analíticos carece de verdadero valor si no es aplicado por laboratorios que satisfagan las adecuadas normas de calidad.

Esta exigencia quedó reconocida en el artículo 13 de la Directiva que nos ocupa, en el que la Comisión se comprometió a presentar al Parlamento y al Consejo un informe relativo a:

- las disposiciones referentes a la formación de los inspectores actualmente en vigor en los Estados miembros;
- la posibilidad de elaborar disposiciones comunitarias relativas a la definición de la formación básica y perfeccionamiento de los inspectores;
- la posibilidad de establecer normas comunitarias de calidad para todos los laboratorios que participen en los controles y tomas de muestras;
- la posibilidad de crear un servicio de inspección de la Comunidad, previendo igualmente el intercambio de informaciones entre todos los establecimientos y personas que se ocupan del control.

Por lo que se refiere a las normas de calidad para los laboratorios, es preciso recordar que ya se han adoptado disposiciones comunitarias relativas a la fijación de buenas prácticas de laboratorio y de control de la conformidad de los ensayos sobre productos químicos (mediante las Directivas 87/18/CEE y 88/130/CEE). Además, el CEN/ CENELEC (organismo europeo común de normalización) ha elaborado igualmente la serie de normas EN 45.000; en su globalidad, este conjunto de documentos representa un modelo válido para la adopción de disposiciones análogas que tengan por objeto la calidad de los ensayos efectuados sobre los productos alimenticios.

En la actualidad, los controles de los productos alimenticios en los Estados miembros se basan en disposiciones nacionales ad hoc efectuados por los organismos competentes, que pueden recurrir a los

análisis de laboratorio. El reconocimiento mutuo de los resultados conseguidos en los laboratorios por los organismos de control debe considerarse como una condición previa fundamental a los intercambios sin obstáculos de productos alimenticios entre los Estados miembros. Permitirá, además, garantizar la protección del consumidor y evitar toda duplicación inútil en materia de análisis de laboratorio. Los resultados de estos últimos constituyen no sólo la base de acciones judiciales en un Estado miembro, sino también —en el marco del sistema de alerta rápida que la Comisión tiene establecido (6)— el punto de partida de medidas comunitarias adecuadas.

Por estas razones, los laboratorios a los que las autoridades competentes confían el control de los productos alimenticios deben ser objeto de un sistema de normas de calidad. Sistema que debería ser conforme a las normas universalmente aceptadas, de modo que se garantizara la calidad de los resultados de los análisis que se faciliten.

Basándose en estos conceptos la Comisión está elaborando una propuesta, en la que se tendrá en cuenta también la posibilidad de una especialización por sectores de los laboratorios de control.

(6) Cuya «informatización» se propuso en el curso del II Simposio sobre Control, de Roma, ya citado

## AGENTES DE CONTROL

9. Por lo que se refiere a los «inspectores» que se ocupan de los productos alimenticios (respetando la terminología utilizada en el artículo 13.a de la Directiva 89/397/CEE), sus funciones no están definidas con precisión. En el curso de la encuesta efectuada sobre este tema por la Comisión se constató que, en algunos Estados miembros, el término «inspector» se aplica a funcionarios con título universitario, mientras que en otros países de la Comunidad no es así. Por ello sería preferible reemplazar el término «inspector» por otro más adecuado como «agente de control», siempre que se precise que estos agentes pueden realizar actividades a niveles y en ámbitos diferentes.

En efecto, del mismo estudio resultó que:

— en la totalidad de los Estados miembros, las responsabilidades directivas y organizativas en materia de control se confían a agentes con un título superior con una licencia universitaria, preferentemente, pero no exclusivamente, de carácter científico;

— dichos agentes en contadas ocasiones actúan directamente; toda vez que la rutina del control se confía a otros agentes de nivel intermedio, cuya formación de base (no universitaria) puede verse completada, en su caso, mediante la oportuna formación técnica;

— la dirección del trabajo de laboratorio en cualquier caso se atribuye a científicos, aunque la ejecución material de los análisis es realizada en la mayoría de los casos por colaboradores de nivel intermedio.

El nivel de formación y competencia de todo este personal es prácticamente uniforme en toda la Comunidad, y a nivel de los respectivos países puede considerarse adecuado. Sin embargo, en un contexto europeo, y con la perspectiva del mercado único, convendría completar la formación de los responsables de los diferentes sectores de control mediante nuevos conocimientos relativos a:

— la estructura y organización de los servicios de control en los otros Estados miembros (en el sentido de aquellos a los que no pertenecen), así como la filosofía que los inspira;

— los problemas específicos de cada Estado miembro y las soluciones arbitradas para resolverlos;

— las técnicas que se han elaborado a tal fin;

— los principios que han inspirado las diversas legislaciones nacionales.

No es posible conseguir estos conocimientos con meros cursos de formación permanente. La Comisión prefiere ofrecer a los responsables del control público la posibilidad de conocer directamente las diversas situaciones nacionales mediante la organización y financiación de un sistema de visitas de trabajo entre funcionarios de los servicios competentes de los diversos países.

Recientemente se ha completado el primer ciclo de visitas de trabajo. El segundo está en curso de organización y debería iniciarse próximamente (7).

Estos ciclos de visitas se complementarán mediante seminarios con el objetivo de dar a los agentes nacionales de control la posibilidad de encontrarse periódicamente y cotejar sus experiencias.

Una ventaja adicional de este programa será la creación de una «red» de contactos personales, de gran utilidad para facilitar la solución de los problemas que puedan plantearse en el marco de la libre circulación de

productos en el seno del mercado único.

10. Nos referiremos, finalmente, al tema de un «servicio» de inspección de la Comunidad. La Comisión estima que un cierto número de argumentos está a favor de la creación de un pequeño grupo de funcionarios comunitarios cuya actividad se desarrollaría en el ámbito del control de los productos alimenticios (8). Podría preverse para este grupo la función de audit, contribuyendo especialmente a la aplicación uniforme de las disposiciones del Tratado de Roma que rigen la libre circulación de mercancías. Podría también desempeñar un papel de mediador y contribuir a la solución de los problemas que surjan entre los Estados miembros, facilitando al mismo tiempo la aceptación de los productos.

Será importante igualmente establecer, además, ciertas reglas para la creación de un sistema de colaboración administrativa entre los Estados miembros y la Comisión por lo que se refiere a la información obtenida durante las inspecciones, de forma análoga a la que se hace en el sector aduanero y veterinario. La Comisión presentará en breve una propuesta de acto del Consejo sobre este tema (9).

(7) Nótese que este artículo fue redactado a principios de 1991.

(8) Existen ya algunos «modelos» en otros sectores alimentarios; por ejemplo, pesca, carne lresca, frutas y verduras, y vino.

(9) Para complementar este trabajo, será preciso analizar concretamente en qué campos convendría establecer normas específicas de aplicación con la finalidad de integrar el marco general que la Directiva relativa al control oficial de los alimentos ha creado. El ámbito en el que parece que esta necesidad se hace sentir con más fuerza es el de la higiene de la producción y comercio de los productos alimenticios. En este sentido se han imaginado múltiples soluciones que van de una legislación vertical y sectorial a un enfoque horizontal, en cuyo ámbito se establecerían los objetivos a lograr, adoptando, en su caso, códigos de «buenas prácticas» y dejando a los Estados miembros la tarea de escoger los medios más apropiados a tal fin. La cuestión está actualmente en estudio.

#### BIBLIOGRAFÍA (10)

«CEE: La Directiva Stauffenberg relativa a la cooperación judicial y administrativa en materia de Derecho alimentario», Alimentaria, n.º 196, octubre de 1988, pp. 93 ss. (AR).

«Realización del Mercado Interior: supresión de los controles en las fronteras», OPOCE, Luxemburgo, diciembre de 1989. 95 pp. (DC).

CASTANG, Charles: «La création éventuelle d'un service communautaire d'inspection des denrées alimentaires», CERVAC, Aix-Marseille, enero de 1990, 14 pp. (DC).

OMS/FAO: Orientaciones para el establecimiento de un eficaz sistema nacional de inspección de alimentos, FAO, Roma, 1978 (LI).

GONZÁLEZ VAQUÉ, Luis: «CEE: Consideraciones en torno a una propuesta de Directiva sobre el control alimentario». Alimentaria, n.º 184, julio-agosto de 1987, pp. 74 ss. (AR).

— «Programa de formación de inspectores en la CEE», ponencia presentada al II Congreso Nacional de Política Municipal de Consumo, San Sebastián, noviembre-diciembre de 1990, 9pp. (DC).

KOSSENÖY, Thomas: «Lebensmittelsicherheit und Lebensmittel Überwachung: Ziele, Instrumente, Verfahren», ZLf?, 4/90, 28 de agosto de 1990, pp. 357-361 (AR).

KREBS, Walter: «Das Zusammenwirken privater und öffentlicher Lebensmittelüberwachung: Rechtliche Möglichkeiten und Grenzen», ZLR, 4/90, 28 de agosto de 1990, pp. 362-376 (AR).

MATTEHA, A.: «L'élimination des barrières techniques et la mise en oeuvre de la reconnaissance mutuelle», Revue du marché commun, n.º 334, febrero de 1990, pp. 80 ss. (AR).

MILLER, Stanford A.: «Presente y futuro del análisis alimentario», Gaceta Sanitaria, n.º 5, vol. 2. marzo-abril de 1988, pp. 112 ss. (AR).

PERISSICH, R.: «Food Control in the European Community, Food Control, vol. 1, n.º 3, julio de 1990, pp. 30-31 (AR).

S. E. DE AEDA: «Nueva Directiva relativa al control oficial de los productos alimenticios (Texto comentado)», Alimentalex, n.º 1, junio de 1989, pp. 165 ss- (AR).

SEGURA, Isabel: «El control alimentario en los países de Europa», Alimentaria, n.º 130, pp. 66 SS. (AR).

TORRE BORONAT, M. C. de la: «El análisis de los alimentos en la actualidad y perspectivas de futuro». Alimentaria, n.º 215, septiembre de 1990, pp. 25 ss. (AR).

(10) Estas referencias bibliográficas han sido añadidas especialmente para la versión española (véase la nota 1).

Abreviaturas: (AR), artículo de revista; (DC), documento (LI). libro.

## LA DIRECTIVA 89/397/CEE, RELATIVA AL CONTROL OFICIAL DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS: EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS

### THE DIRECTIVE 89/397/EEC, ABOUT THE OFFICIAL CONTROL OF FOOD PRODUCTS: EVALUATION AND PERSPECTIVES

#### RESUMEN

Hasta la aprobación de la Directiva 89/397/CEE, el control oficial de los productos alimenticios, tanto en los aspectos sanitarios como de calidad, correspondía en exclusiva a las Administraciones nacionales, no garantizándose una protección uniforme del consumidor en todo el ámbito de la CEE, además de provocar dificultades en la libre comercialización de estos productos.

Las cuestiones clave de esta Directiva, que constituye un marco general destinado a completarse mediante disposiciones específicas —a medida que se vaya necesitando— examinadas en este artículo, principalmente se refieren a los métodos de análisis a emplear, su equivalencia y la fiabilidad de los laboratorios que los realicen, la formación y competencia del personal inspector, y los cambios organizativos que la adecuada aplicación de esta Directiva va a exigir a los Servicios de la Comisión.

#### ABSTRACT

Until the approval of the Directive 89/397/EEC, the official control of food products, both in sanitary aspects and quality, exclusively corresponds to the national Administrations, not guaranteeing a uniform protection of the consumer in all the EEC environment, besides provoking difficulties in the free commercialization of these products.

The key questions of this Directive, that constitutes a general framework destined to be completed by means of specific dispositions, as needed, examined in this article, are mainly referred to the methods of analysis to be employed, their equivalence and the reliability of the laboratories that carry them out, the training and competence of inspectors and the changes of organization that the suitable application of this Directive is going to demand from the Commission Services.

## Colaboradores

PARRA LUCÁN, María Ángeles.

Doctora en Derecho, Profesora de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

VERARDI, Giuseppe

Administrador principal. Dirección General III de la Comisión de las Comunidades Europeas.

FERNÁNDEZ SAN JUAN, Pedro Mario

Licenciado en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, es facultativo especialista del Centro Nacional de Alimentación (Instituto de Salud Carlos III) de Majadahonda, y actualmente trabaja en el Departamento de Bromatología de dicho Centro. Farmacéutico titular en excedencia. Autor de artículos y comunicaciones, es miembro activo de varios grupos de la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria (CIOA).